

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 30 º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-3933-2022  
CARATULADO : CORDERO/FISCO DE CHILE - CDE

Santiago, nueve de Agosto de dos mil veinticuatro

**VISTOS:**

Con fecha 12 de mayo de 2022, comparecen don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, abogado, y don Eduardo Armando García Ramos, abogado, en representación de doña **Xicmenia Alejandra Cordero Garrido**, pensionada, todos domiciliados en calle Bandera N°236 subterráneo, comuna de Santiago, quienes deducen demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliados en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Fundan la acción en que la demandante se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040, del año 2003, Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech II, bajo el número 2204 en dicho listado.

Exponen que doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido, relata los hechos que fundan la presente demanda, de la siguiente forma:

Señala que en el año 1985 vivía en la ciudad de Santiago, era joven, tenía 21 años, se dedicaba a las labores del hogar, estaba casada y tenía un hijo.

Indica que un día domingo en la madrugada llegaron personas de la CNI a su casa, en la que estaban su esposo, su hermana con su hija, y ella con su pequeño.



Sostiene que estas personas comenzaron a darles golpes, por lo que estaban asustados, su hijo con aproximadamente tres años de edad le pegaba a su manera al hombre que la estaba golpeando, intentando defenderla desesperadamente, lo que fue desgarrador.

Agrega que en ese instante llegó su hermano, porque vio desde lejos que entraron a la casa, con la intención de rescatar a los niños. Señala que su hermano pudo quedarse con su hijo, pero no con su sobrina de tan solo dos añitos.

Manifiesta que la detuvieron junto con su esposo, su hermana y su sobrina. Expresa que los llevaron vendados todo el camino, por ello no tiene conocimiento de donde estuvieron, pero sí sabe que los tenían en el mismo lugar, pero en diferentes celdas.

Indica que mientras estuvo detenida le hicieron cosas atroces, inhumanas y asquerosas, desnudándola, violándola, recibiendo incontables golpes y malos tratos, la insultaban y humillaban siempre.

Recuerda que mientras la violaban le dijeron que estaba embarazada, lo cual pensó que no era cierto. Añade que en la celda de al lado escuchaba a su hermana, ella rezaba reiteradamente, le pedía a Dios el poder salir de ese lugar con vida. Sostiene que muchas veces escuchaba sus gritos, sentía como le pegaban y le tiraban cosas.

Afirma que los trataron como objetos, como que no fueran seres humanos.

Expone que estuvo cinco días detenida en el mismo lugar, pero que para ella fue un período interminable. Añade que gracias a su suegro pudo salir de ese espantoso tormento, él encontró dónde estaban, siendo liberada con su esposo y su hermana. Saliendo los tres muy mal de ahí. En ese instante se dio cuenta que estaban en un cuartel de la CNI.



Hace presente que, posteriormente hizo su declaración, la examinaron y le informaron que estaba embarazada, confirmando que era verdad lo que dijo aquel hombre mientras permanecía detenida.

Comenta que estaban en “libertad”, pero seguían siendo perseguidos. A su marido lo volvieron a tomar detenido, era buscado porque se llamaba igual que su padre. Añade que a los dos meses después de que salió libertad también se llevaron detenido a su suegro.

Relata que su familia fue muy discriminada. Vivían en un lugar donde habitaban carabineros, entonces con mayor razón los estigmatizaban, sufriendo persecución, se sentían observados, tenían miedo y pensaban que los podrían asesinar, por ello se fueron del país.

Manifiesta que en agosto del año 1985 comenzaron a vivir en Australia, atendiéndose inmediatamente con una psicóloga.

Indica que en todo este tiempo no podía salir de su casa, le daban crisis de pánico y de ansiedad. Respecto a su hijo mayor, él quedó con un miedo enorme hacia los uniformados, orinándose con tan solo verlos. Estuvo con psicólogo ocho años, y hasta el día de hoy recuerda todo lo sucedido, a pesar de la corta edad que tenía en ese entonces.

Manifiesta que a sus cortos veintiún años vivió tales atrocidades, pensando en quitarse la vida, sufría de insomnio, pesadillas, reviviendo los gritos, sintiendo miedo, tristeza y constante ansiedad, vivir era un tormento. Comenta que fue al médico por algunos dolores en su cuerpo, y se le diagnosticó artritis y osteoporosis. Afirmo que estas enfermedades fueron producto de los golpes y caídas que recibió, que no puede caminar bien. Agrega que durante bastante tiempo no podía conciliar el sueño, a veces pasaban tres o cuatro días sin poder descansar, por ello, la medicaron.



Continúa relatando que lo que vivieron en la detención sin duda arruinó sus vidas, su esposo cambió su personalidad por las torturas que recibió, lo golpearon muchas veces y le ponían electricidad en su cuerpo, debido a esto, indica que se volvió una persona violenta y agresiva, por lo que su matrimonio se destrozó.

Señala que volvió a Chile hace aproximadamente cuatro años, su hijo menor se quedó en Australia.

Expresa que nunca ha podido rehacer su vida, no ha logrado disfrutar su existencia. Se aisló del mundo, no le gusta salir, sólo está en su casa, sin compartir con otros, no tiene amistades ni nada.

Comenta que actualmente vive con su hijo mayor en la casa de su difunta madre, quien era su apoyo fundamental cuando tenía crisis, quien falleció hace once años, y su partida le destrozó el corazón.

Finaliza su relato expresando que hasta el día de hoy no puede salir de su casa sola, tiene miedo y se siente perseguida. Sueña frecuentemente con las torturas y con las violaciones, recordando los gritos horribles y el terror que sentía, todavía piensa en suicidarse.

Añade que le dan unas ganas inmensas de llorar, tiene una desesperación y angustia tan grande que no puede soportar, sintiendo que su corazón se va a detener en cualquier momento.

En cuanto a los fundamentos de derecho, exponen las siguientes alegaciones:

Afirman que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad.

Refieren a la responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República, invocando el artículo 38 inciso 2º, respecto del cual concluyen que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en



diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público.

Refieren a la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, y apuntan que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile – por cierto– forma parte.

Conforme a ello, estiman improcedente aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Indican que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto –como es fácil comprender– se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Exponen la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en materia de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, respecto de lo cual concluyen que la idea de reparación se trata de



una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Y que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el jus in bello.

A modo ilustrativo citan jurisprudencia pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema, en la que se ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil cuando éste emana de un crimen de lesa humanidad. Asimismo han desechado las excepciones de prescripción, de pago, de reparación satisfactiva y de preterición legal hechas valer por el Estado de Chile como argumentos para no indemnizar a los familiares de las víctimas.

Respecto a la responsabilidad objetiva del Estado, indican que como se ha fallado reiteradamente por nuestra Corte Suprema, para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado no es necesaria la acreditación del elemento subjetivo (dolo, o culpa), puesto que dichos elementos no pueden encontrarse en una persona sin sentimientos, como lo es el Estado o su administración (persona jurídica). Que con lo anterior, para determinar entonces la procedencia de la responsabilidad estatal, el agraviado debe probar únicamente la existencia de daño o perjuicio provocado; y la actividad (o inactividad) del órgano de estado que lo genera, y desde luego la relación de causalidad.



En cuanto a la existencia del daño o lesión, exponen que don Enrique Barros Bourie, ha señalado que *“basta la lesión de un interés legítimo y relevante de la víctima para que se entienda que ha sufrido un daño reparable”*. Y que actualmente nadie podría negar la procedencia del daño moral en el marco de la responsabilidad, encontrándose aquella incluso su fundamento en nuestra propia Carta Fundamental.

Concluyen que al no excluir la Constitución el daño moral (salvo en el supuesto de expropiación), la reparación puede comprender sin problema dicho daño.

Referente a la causalidad, argumentan que esta se encuentra fehacientemente acreditada. De hecho, el mismo demandado Estado de Chile ha reconocido su calidad de torturada, apareciendo en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (llamado coloquialmente Informe Valech I) bajo el número 2204 en dicho listado.

Respecto al daño provocado y el monto de la indemnización, indican que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima, que vivió.

Afirman que la dolorosa situación a la que se ha visto enfrentada su representada configura un claro daño moral que -según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional- amerita ser reparado a través de una indemnización.

En cuanto al daño moral, señalan que corresponde a aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es, un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Añade que esta forma de conceptualizar



el daño moral es consistente con los sentidos dados por la doctrina chilena y la jurisprudencia (nacional e internacional). A modo de ejemplificar aquello hace referencia a doctrina nacional y a jurisprudencia.

Por último, indican que la cifra pedida en la demanda a modo de indemnización de perjuicios -\$200.000.000-, no es antojadiza, y se basa tanto en la jurisprudencia actual, como en la magnitud del daño causado, el cual ha quedado claramente de manifiesto en esta demanda y además se acreditará en la etapa procesal respectiva.

Finalizan solicitando tener por interpuesta demanda de Indemnización de perjuicios por Responsabilidad Extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, representado legalmente en esta jurisdicción por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar a la demandada al pago de la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido, ya individualizada, por concepto de daño moral, o a la suma que conforme a derecho se determine, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y además las costas de la causa.

**Con fecha 12 de agosto de 2022, se notificó la demanda al Fisco de Chile.**

**Con fecha 2 de septiembre de 2022, la parte demandada contesta la demanda**, solicitando su rechazo o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

#### I.- Excepción de Reparación Integral

Como primera defensa, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la actora.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH



Refiere al marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria. Afirma que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Sostiene que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En consecuencia, al mes de diciembre de 2019, el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Refiere que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus respectivas modificaciones. De este modo, se estableció una pensión anual de reparación y otorgó



beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas, estableciendo una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422 para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, la actora recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación, en conformidad a la Ley N° 20.874 ,por la suma de \$1.000.000.

Además, refiere que se concedió a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debía concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Hace presente que, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. Afirmo que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y también beneficios en vivienda, correspondiente al acceso de subsidios de vivienda.

Asimismo, manifiesta que, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.



Colige que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.

Concluye que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos, como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

## II.- Excepción de prescripción extintiva:

En subsidio, el demandado opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indica que conforme al relato efectuado por la actora su detención ilegal, la prisión política, los apremios ilegales y las torturas que sufrió ocurrieron durante cinco días no precisados del año 1985. Sostiene que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 12 de agosto de 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.



Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.

Agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público, estando consagrada en las normas del Título XLII del Código Civil, y en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Indica que debe considerarse que, en la especie, se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. Para ello, basta considerar que el



derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción patrimonial, destaca que ni la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad," ni los "Convenios de Ginebra de 1949," ni la "Resolución N° 3.074 de 1973," ni la "Convención Americana de Derechos Humanos" establecen la imprescriptibilidad para acciones civiles indemnizatorias.

Afirma el demandado que, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

### III.- En cuanto al daño e indemnización reclamada:

Señala que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de



dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Expone que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral (\$200.000.000), resulta absolutamente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Continúa su defensa, señalando que en subsidio de las alegaciones opuestas, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por la actora a través de los años por parte del Estado, y que seguirá percibiendo a título de pensión, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Manifiesta respecto a los reajustes e intereses demandados, que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Reitera que en el hipotético caso de que se acoja la acción de autos y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.



Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones y defensas opuestas, rechazar la demanda en todas sus partes, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

**Con fecha 14 de septiembre de 2022, la parte demandante evacúa el trámite de réplica.**

En primer lugar, señala que la demandada no ha controvertido la condición de víctima de la demandante, ni la exposición de hechos contenidos en la demanda, que dan cuenta del secuestro, prisión política y torturas sufridos por quien representan. Tampoco su calidad de víctima calificada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura por los hechos relatados en la demanda.

Respecto a la excepción de reparación integral alegada por el demandado, señala que las pensiones concedidas en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por su mandante en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

En cuanto a la improcedencia de la excepción de prescripción extintiva, señalan que le parece jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Afirma que la defensa fiscal que pretende la aplicación de las normas de Título XXXV del Libro IV del Código Civil y las reglas referidas a la prescripción extintiva resulta absolutamente impertinente.

Concluye que el estatuto legal aplicable al caso concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país en los términos del artículo 5 inciso 2º de la carta fundamental, y de las normas vigentes no puede ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre particulares.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH

Sobre el monto demandado, reitera que no hay dinero que supla el dolor experimentado por su mandante, y con razón, más de algún estudioso se ha preguntado si se puede “reparar lo irreparable”.

Por último, respecto a la reajustabilidad, señala que está ligada a la garantía de la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones. La desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como es el Índice de Precios del Consumidor (IPC).

**Con fecha 11 de octubre de 2022, la parte demandante evacúa el trámite de duplica,** reiterando sus defensas expresadas en el escrito de contestación.

Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas y, en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

En cuanto a la excepción de prescripción sostiene que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. La aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “*a favor y en contra del Estado*”.

**Con fecha 24 de noviembre de 2022, se recibió la causa a prueba.**

**Con fecha 13 de febrero de 2024, se citó a las partes para oír sentencia.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH



## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Que la parte demandada contestó el libelo, pidiendo su rechazo, al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.

**TERCERO:** Que se fijaron los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, respecto de los cuales debía recaer la prueba:

1.- Efectividad de que se han generado daños o perjuicios en la persona de la demandante.

2.- En la afirmativa del punto anterior, naturaleza y monto de los perjuicios sufridos por la demandante.

3.- Relación de causalidad entre el actuar de la parte demandada, y los perjuicios que reclama la actora.

4.- Pagos o reparaciones efectuados por el Fisco de Chile a la demandante. En la afirmativa, naturaleza y monto.

**CUARTO:** Que a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó los siguientes documentos en autos:

A folio 1 y 22:

1.- Copia de Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech I, en la que doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido figura con el número 2204.

A folio 21:

2.- Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado Norma técnica para la atención



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH

de salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.

3.- Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido, donde se acredita su calidad de víctima de violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Chile.

4.- Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura de doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido, suscrito por la Psicóloga Clínica particular, doña Massiel Cerna Cuevas, de julio de 2022.

5.- Copia de certificado de título de la psicóloga particular doña Massiel Cerna Cuevas.

A folio 22:

6.- Fallo de casación en Episodio “*Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli*”, Rol N° 5831-2013.

7.- Fallo de casación en Episodio “*Torres de San Borja*”, Rol N° 2918-2013.

8.- Fallo causa “*Marcone con Fisco de Chile*”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de diciembre de 2015.

9.- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “*Órdenes Guerra y otros vs Chile*”, Rol CDH-2-2017.

10.- Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015.

11.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Reflexiones y Propuestas de S.E. el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, páginas 5 a la 10, inclusive.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH

12.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura HUMILLACIONES Y VEJAMENES, páginas 239 a la 241, inclusive.

13.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura. GOLPIZAS REITERADAS, páginas 226 a la 228, inclusive.

14.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. LESIONES CORPORALES DELIBERADAS, páginas 229 a la 230, inclusive.

15.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura PRESENCIAR TORTURAS DE OTROS, páginas 244 a la 245, inclusive.

16.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Métodos de Tortura. AGRESIONES Y VIOLENCIA SEXUALES, páginas 242 a la 244, inclusive.

17.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura PRIVACIONES DELIBERADAS DE MEDIOS DE VIDA, página 248.

18.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura CONFINAMIENTO EN CONDICIONES INFRAHUMANAS, páginas 247 a la 248, inclusive.

19.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura. POSICIONES FORZADAS, páginas 232 a la 233, inclusive.

20.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura DESNUDAMIENTO, páginas 241 a la 242, inclusive.

A folio 26:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH

21.- Copia de declaración jurada de la Psicóloga Massiel Nicole Cerna Cuevas, certificada ante Notario Público, en la ciudad de Chillán el día 21 de marzo de 2023, en que ratifica el Informe Psicológico realizado por doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido.

A folio 29:

22.- Copia de informe psicológico de evaluación de daño de doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido, elaborado y suscrito por el Psicólogo Clínica de PRAIS, don Javier Castro Alfaro y la Medica Internista Doña Pamela Jeria Ortiz, del Servicio de Salud Metropolitano sur Oriente, de fecha 19 de mayo del 2023.

**QUINTO:** Que, por su parte, la demandada solicitó oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informara todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido la actora, recibándose respuesta de tal institución el día 5 de octubre de 2022, agregada a folio 14.

**SEXTO:** Que son hechos pacíficos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1.- Que en abril del año 1985 doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido fue detenida, en su hogar, por agentes de la CNI.

2.- Que la actora permaneció privada de libertad cuatro días.

3.- Que durante todo el tiempo que permaneció como prisionera política, fue objeto de apremios físicos, psicológicos, sexuales y torturas de gran entidad.

4.- Que la actora ha sido reconocida como víctima de violación a los Derechos Humanos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número de registro 2204.

**SÉPTIMO:** Que la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios, deducida por doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH

en su calidad de víctima de prisión política y tortura durante el régimen militar.

En consecuencia, junto con analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión de la actora, es procedente referirse previamente a las defensas esgrimidas por el demandado, las que se circunscriben a la reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante y a la prescripción.

**OCTAVO:** Que, en efecto, alega la demandada que la actora ya se encontraría indemnizada de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que al haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.

**NOVENO:** Que conforme a lo consignado en el oficio ORD: DSGT N° 4792-9245 de 28 de septiembre de 2022, suscrito por el Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, consta que el demandante ha recibido como reparación la cantidad total de \$23.377.966, suma de la cual \$22.955.710 corresponden a pensión por beneficio Ley N° 19.992, y \$422.256 por concepto de aguinaldos, siendo su pensión mensual actual de \$207.774.

**DÉCIMO:** Que las transferencias de dinero realizadas a la actora, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no conllevan –necesariamente- la reparación íntegra de los daños padecidos por la actora en su calidad de víctima de prisión política y tortura, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.



Lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Que, además, los beneficios otorgados por la Ley N°19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

Que en el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”* (Sentencia Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 12.636-2018).

Conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

**UNDÉCIMO:** Que respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el



artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.

**DUODÉCIMO:** Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se sujeta a las normas internas que rigen en el ámbito patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometiéndose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Tal controversia –y la postura que se adopte- no resulta baladí. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que la actora pudo ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

**DÉCIMO TERCERO:** Que para zanjar tal problemática, es necesario considerar que si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.



Ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

**DÉCIMO CUARTO:** Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a*





*consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, ...” (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N°12.636-2018).*

Con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta magistrada se inclina por la postura de una imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido, demanda indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la detención y torturas de que fue objeto, por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, siendo incluso calificada como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados.

Luego, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por la actora.

**DÉCIMO SEXTO:** Que el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

El daño moral tiene su causa en la transgresión al ordenamiento jurídico y su consecuencia es el sufrimiento causado en la víctima, producto de la limitación a un interés legítimo. Así, la persona titular de un derecho subjetivo o de un bien jurídico, al ser despojada de su legítimo goce, se le priva de su ejercicio y sufre como consecuencia un daño extrapatrimonial.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, desde que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por la actora -sino únicamente la suma pedida a su respecto-, la parte demandante



rindió prueba documental para acreditar su detrimento, destacándose en este punto el informe psicológico, elaborado por el psicólogo Javier Castro Alfaro y por la médico internista doña Pamela Jeria Ortiz, del PRAIS SSMSO, agregado a folio 29, quienes indican que la actora presenta sintomatología asociada a un trastorno de estrés postraumático, con la presencia de síntomas perteneciente a este cuadro: reacción de comportamientos evitativos ante estímulos externos que ella vincula a la situación de violencia, distanciamiento y desapego de otras personas, sueños de carácter traumático y una percepción negativa ante la vida.

**DÉCIMO NOVENO:** Que a la misma conclusión arriba el informe psicológico elaborado por la psicóloga Massiel Cerna Cuevas, acompañado a folio 21, quien afirma que doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido está atravesando por síntomas asociados a un trastorno de estrés postraumático, en relación a la vulneración de sus derechos humanos fundamentales a contar del mes de abril de 1985, donde fue detenida, violentada y torturada de diversas maneras; lo que perjudicó de forma significativa la vida de la evaluada y de su núcleo familiar, sufriendo daños físicos y adicionales, como trauma psicosocial, aislamiento de su familia, amedrentamiento, persecución sostenida y exilio en Australia.

Agrega dicho documento que también se puede valorar el daño moral en función a la afectación somática que sufre la víctima: pérdida de sueño o apetito, automedicación, enfermedad en la piel, músculos, articulaciones, entre otros; unido a ser víctima de daño moral sexual, sufriendo perjuicios relacionados a esta esfera íntima.

**VIGÉSIMO:** Que de los informes técnicos mencionados, es dable dar por acreditado que producto de la prisión política y torturas sufridas, la vida de la actora sufrió un cambio radical y profundo, dado que dicha experiencia traumática afectó y alteró todos los ámbitos de su vida en forma permanente, llevándola a radicarse por más de veinte años en Australia, con el consecuente desarraigo y desmembramiento familiar y social.



**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que correspondiendo avaluar prudencialmente el daño moral padecido por la actora, considerando las secuelas mencionadas, las repercusiones psicológicas profundas y persistentes a lo largo de los años y la reparación pecuniaria ya recibida por parte del Estado, este será estimado en la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos).

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado y devengará intereses corrientes desde que la demandada incurra en mora.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimando que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas.

Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción.**

**II.- Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida,** solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a doña Xicmenia Alejandra Cordero Garrido la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos) a título de daño moral.

**III.- Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado, y devengará intereses corrientes desde que la demandada se constituya en mora.**

**IV.- Que no se condena en costas a la demandada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH

Notifíquese, regístrese y archívese.

**Rol C-3933-2022**

Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, Juez Titular del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago**, a **nueve de Agosto de dos mil veinticuatro**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYKXPXSYPH